



Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades

ISSN: 0188-9834

noesis@uacj.mx

Instituto de Ciencias Sociales y Administración  
México

Pérez García, Martha Estela

Las Organizaciones No Gubernamentales en Ciudad Juárez y su lucha contra la violencia de género  
Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, vol. 15, núm. 28, julio-diciembre, 2005, pp. 147-167

Instituto de Ciencias Sociales y Administración  
Ciudad Juárez, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85915208>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica  
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

# Las Organizaciones No Gubernamentales en Ciudad Juárez y su lucha contra la violencia de género

Martha Estela  
Pérez García<sup>1</sup>

*En este artículo se hace un breve análisis del desarrollo de las ONG juarenses, se explora la acción colectiva femenina en la búsqueda de justicia a raíz de los asesinatos de mujeres, revela cuáles han sido sus principales convergencias y divergencias, además habla de su relación con las madres de las víctimas y con el gobierno.*

## INTRODUCCIÓN

Ciudad Juárez se vuelve un campo de controversia mundial por la problemática que surge desde hace más de 10 años, cuando la frontera se convierte en un espacio de muerte ante las múltiples apariciones de cuerpos de mujeres esparcidos en cementerios clandestinos. La situación toma por sorpresa al gobierno que deja pasar el asunto porque percibe el fenómeno como una parte de los sucesos violentos de la localidad y se justifica diciendo que la muerte de mujeres es un proceso *natural*. Ante tal estado de

inacción surgen grupos preocupados de mujeres que conforman Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como parte de una estrategia de acción para exigir justicia, sacar de la invisibilidad el fenómeno y llevarlo a niveles nacionales e internacionales.

En este artículo se trata de explicar cómo se ha desarrollado el trabajo de dichas ONG, asimismo, se hace una revisión de la acción colectiva de mujeres en la búsqueda de justicia, se revela cuáles han sido sus principales convergencias y divergencias, además se ofrece un análisis de su relación con las madres de las

<sup>1</sup> Candidata a Doctora en Ciencias Sociales en el Área de Cultura Política y Relaciones de Poder, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. Correo electrónico: ambiente01@prodigy.net.mx.

víctimas y con el gobierno, finalmente incluye algunas breves reflexiones.

#### LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

Las Organizaciones No Gubernamentales se pueden concebir como organismos autónomos con una estructura definida, sin fines de lucro, instituidos para la satisfacción de demandas específicas, creados por la suma de voluntades individuales, donde cada sujeto que la conforma le da su toque personal gracias a las características específicas que posee.

En un contexto político en busca de la democratización se empiezan a conformar estos nuevos actores sociales que se insertan en un mundo moderno reinventando nuevas formas de hacer política e instituyéndose como uno de los desafíos de la sociedad civil hacia el Estado.

Por primera vez en la historia contemporánea de Ciudad Juárez se tiene una lucha organizada de mujeres dirigida por ellas mismas, una lucha de mujeres por las mujeres que logra la institución de un espacio de poder para ejercer presión en contra de los asesinatos, defender sus derechos y democratizar espacios predominantemente masculinos. A partir de esta acción colectiva se logran construir organismos influyentes y vigilantes del

gobierno con capacidad de incidir en las decisiones gubernamentales y en la agenda local.

No obstante el esfuerzo trazado desde hace más de diez años, el camino se ha delineado por grandes divergencias, los primeros conflictos han sido con los funcionarios públicos por su falta de sensibilidad ante la situación, sus intentos de desprestigiar la movilización, además de la represión ejercida contra algunas actoras sociales.

Aunque han surgido distintas ONG que han venido a enriquecer la arena pública local, a la par se han multiplicado sus contradicciones, exhibiéndose su vulnerabilidad por la falta de acuerdos coordinados para la acción pública, las discrepancias en la obtención y el uso de recursos económicos, un cierto sentido de protagonismo y su incómoda relación con algunas madres de víctimas.

Como se sabe, en el estado de Chihuahua durante la segunda parte del gobierno de Francisco Barrio se agudizan los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. El Presidente Municipal de esta ciudad fronteriza es entonces el panista Ramón Galindo Noriega (1995-1998), a él acuden las mujeres de las ONG para pedirle alguna solución, pero no realiza ninguna acción enérgica para tratar de aminorar el problema, se le combate con

una campaña de promocionales en los medios de comunicación donde se pide a las mujeres abstenerse de portar *vestimenta provocativa* o ante la inminencia de un posible ataque *vomitara* al victimario como forma de ahuyentarlo.

Ante la falta de resultados, las mujeres de las organizaciones presentan una denuncia a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Chihuahua el 12 de octubre de 1997. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en mayo de 1998 emite la recomendación 44/98 basada en un estudio de 24 expedientes y entrevistas con funcionarios,<sup>2</sup> recomienda al Gobierno de Chihuahua corregir las fallas en la procuración de justicia. Sin embargo, esta acción, por ubicarse en época electoral es vista como una

estrategia para lesionar la imagen del Partido Acción Nacional (PAN) que está entonces al frente del Municipio de Ciudad Juárez y del gobierno estatal.

La CNDH otorga una prórroga hasta el término de las elecciones, Elsa Almeida<sup>3</sup> (2003) expresa su desacuerdo

....fuimos a la Ciudad de México para decirles que no se hiciera...entonces les dijimos, esto es muy grave, mientras ustedes están dando esta prórroga cuántas muertas pueden aparecer más...y precisamente regresando apareció una alumna mía [asesinada]...

El primer frente que se organiza en 1994 en torno a la problemática de los asesinatos es la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer (CPDM),<sup>4</sup> con una coalición de ONG se funda con grupos que se integran en torno a la defensa de

<sup>2</sup> Las opiniones que recogen en la investigación que realiza la CNDH exhibe la mentalidad de los funcionarios: no es excepcional lo que está ocurriendo en Juárez; las mujeres asesinadas pertenecen a la clase baja y en sus crímenes no se encuentran similitudes; no se puede afirmar que las mujeres presumiblemente asesinadas no comerciaban con su cuerpo, muchas de las mujeres asesinadas trabajaban entre semana como obreras y los fines de semana como prostitutas.

<sup>3</sup> Elsa Almeida, ex regidora (1995-1998), cuenta con una tradición familiar de militancia panista. Es expulsada del PAN en 1998 por tener desacuerdos con el entonces Presidente Municipal Ramón Galindo, labora actualmente para el Gobierno del Estado en la oficina de Registro Civil.

<sup>4</sup> Los organismos que ingresan a la CPDM fueron: Comité Independiente de los Derechos Humanos de Chihuahua (CICH), Centro de Orientación de la Mujer Obrera (COMO), Salud y Desarrollo Comunitario (SADEC), Organización Popular Independiente (OPI), Centro de Investigación y Solidaridad Obrera (CISO), Compañeros, Mujeres por Juárez, 8 de Marzo, Asociación de Trabajadores Sociales de la UACJ, Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC), Comité de Lucha contra la Violencia, Centro de Estudios y Taller Laboral A.C. (CETLAC), Tonanzin, Voces sin Eco y Red de Mujeres.

los derechos de las mujeres,<sup>5</sup> exigir el esclarecimiento de los asesinatos; que se detenga y se castigue a los culpables y se creen dos instancias especializadas de gobierno, una encargada de la investigación de los asesinatos y la otra de dar atención a las víctimas de violencia sexual.

El trabajo de las ONG creadas alrededor de esta problemática gira en torno a brindar una ayuda solidaria a las madres de las víctimas, acompañarlas en el proceso de búsqueda de sus hijas, en los trámites oficiales, así como en exigir justicia. Estos grupos se convierten en una de las pocas alternativas de ayuda

para las madres de las víctimas, Norma Ledesma (2002)<sup>6</sup> dice que las mujeres de las ONG son las únicas que han sido capaces de escucharlas y apoyarlas, y que el haberse unido a éstas ha significado una presión para el gobierno.

Si bien la mayoría de las participantes de ONG tienen un historial como actrices en el espacio público, para las madres,<sup>7</sup> familiares y amistades de las víctimas no es una tarea sencilla salir a defender públicamente sus derechos por su condición social, cultural y de género.

Explica Lucha Castro (2002)<sup>8</sup> que cuando las madres en Chihuahua y en

<sup>5</sup> Estatutos oficiales de la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer: 1) desarrollar una cultura de respeto hacia las mujeres y propiciar la integración de grupos identificados con esta misión; 2) promover la formación y capacitación de las mujeres en los aspectos social, económico, laboral, legal, cultural y de salud, además de difundir sus derechos; 3) crear un espacio de análisis, reflexión e identificación de las causas que generan la violencia hacia las mujeres; 4) elaborar y apoyar propuestas alternativas que incidan en las situaciones que generan violencia hacia ellas; 5) promover las denuncias de violencia doméstica, laboral y sexual hacia las mujeres y; 6) servir de canal de expresión ante las necesidades de las mujeres de Ciudad Juárez.

<sup>6</sup> Norma Ledesma es madre de Paloma Escobar quien desaparece el 2 de marzo de 2002 en la ciudad de Chihuahua y es encontrada sin vida el 23 del mismo mes en esta misma ciudad.

<sup>7</sup> En cuanto al número de madres que participan no se puede hablar de un número fijo, algunas se incorporan o dejan la lucha conforme a sus necesidades e intereses personales.

<sup>8</sup> Lucha Castro junto con su compañera Alma Gómez son unas de las más reconocidas líderes del movimiento de ONG en la ciudad de Chihuahua, pertenecen a los grupos El Barzón, Mujeres de Negro y Justicia para Nuestras Hijas (JPNH), establecidos en la capital del estado. Las dos tienen una tradición amplia de participación política y social en la comunidad, Castro colabora en la desobediencia civil del PAN de 1986 en la ciudad de Chihuahua, se convierte en militante y llega a participar en el IEE como su representante, luego se convierte en militante perredista donde ha contendido para varias candidaturas. Gómez por su parte, es hija de uno de los líderes del asalto al cuartel de Madera en 1965, el dirigente campesino Pablo Gómez. A raíz de la influencia de su padre milita en organismos de izquierda y se integra a la guerrilla en la sierra de Chihuahua, hasta que es encarcelada por algunos años, se une al movimiento en pro de Cuauhtémoc Cárdenas y tiempo después se vuelve militante del PRD, partido del que ha sido diputada local.



Juárez se empiezan a organizar, enfrentan la falta de atención y sobre todo la prohibición de que se organicen, "...les dicen que no anden de *borloteras* o no les van a buscar a sus hijas, que no se unan a las ONG..."

Otro punto desfavorable para la organización de las madres es su condición de clase trabajadora, son mujeres de escasos recursos, lo cual les impide dedicarse al cien por ciento a la causa al tener que laborar para financiarse la movilización, además de tener que cumplir con las responsabilidades del hogar y el

cuidado de la familia. Sus bajos niveles de educación representan otra desventaja, esta condición las aleja de aspirar a la justicia y de poder ejercer los derechos que tienen tanto ellas como su hijas en su calidad de ciudadanas de un país con estado de derecho, lo que las convierte en personas marginadas, discriminadas y vulnerables, Josefina González (2002) habla de su situación "...si mi hija fuera hija de un millonario ya habrían encontrado al culpable..."<sup>9</sup>

En 1998 surge Voces sin Eco,<sup>10</sup> el primer organismo integrado sólo por familiares de víctimas, esta organización busca deslindarse de otros grupos y hacer su propia lucha para presionar a las autoridades ante la falta de respuestas convincentes, se fija entre sus objetivos buscar justicia para las víctimas, auxiliar a las familias y lograr que las autoridades correspondientes realicen programas preventivos contra la violencia; exigen atención, resultados y un trato digno a las

<sup>9</sup> Josefina González es madre de Claudia Ivette González, una de las víctimas encontradas en el campo algodnero.

<sup>10</sup> El primer organismo integrado por familias de víctimas se llama "Voces sin Eco", surge en 1998 y desaparece en 2001. En 2002 nace "Justicia Para Nuestras Hijas" (JPNH) otra de las organizaciones que está integrada por madres de víctimas asesinadas en la ciudad de Chihuahua. Este grupo busca la formación y el proyecto de liderazgo de las mamás, explica Lucha Castro (2003) "...procuramos que en todas las acciones las madres conozcan sus derechos y que ellas mismas resuelvan qué quieren hacer..." Aunque esta organización no forma parte de la investigación de este trabajo, sí es importante enunciarla porque algunas de sus integrantes son actrices importantes y se incluyen en el análisis debido a que confluyen como parte de la historia de las ONG en Juárez. En 2003 surge "Integración de Madres por Juárez", organismo dirigido por Benita Monárrez.

familias. Explica Guillermina González (1999)<sup>11</sup>

...en lugar de que nos tengan lástima, buscamos mostrarnos fuertes y valientes, no les venimos a llorar, eso ya se acabó, estamos luchando por resolver que nos respeten como somos....

Aunque las madres de Voces Sin Eco no obtienen resultados contundentes en sus tres años de existencia, destaca que como grupo hayan adquirido una personalidad y el haber salido del anonimato con un discurso propio.

En 1996, uno de los pocos aciertos del gobierno de Francisco Barrio es cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) anuncia que en respuesta a las peticiones de las ONG serán instaladas en Ciudad Juárez la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Contra la Familia y, la Fiscalía Especial Para la Investigación de Homicidios de Mujeres, Desaparecidas y Atención a Víctimas. Al respecto, Esther Chávez<sup>12</sup> (1999) considera que el gobierno estatal se siente exhibido a nivel nacional y por esta razón accede en la apertura de estas instancias de gobierno, sin embargo, comenta, esto no se debe a que las au-

toridades comprendieran la existencia del problema de violencia de género, fue la presión "...sólo fueron hechas *para apaciguarnos..*".

No obstante los esfuerzos tardíos del ejecutivo estatal, el PAN pierde las elecciones para gobernador en 1998, aunque conserva la alcaldía de Ciudad Juárez. La débil popularidad del candidato panista Ramón Galindo Noriega, el deficiente trabajo de Francisco Barrio durante su administración, la visualización a nivel nacional e internacional de los asesinatos, así como el capital político adquirido por Patricio Martínez, al ser el primer candidato priísta en la entidad elegido por un proceso democrático, son las principales razones por las que el PAN no puede sostener la gubernatura.

Para Alberto Aziz Nassif (2000) los crímenes generan una imagen muy negativa a la administración panista a pesar de las acciones que realiza como es la creación de la fiscalía, los efectos negativos son palpables debido a la incapacidad para solucionar el problema y a que el gobierno siempre sostiene un *discurso frío* de comparación de estadísticas, en el que dicen que el índice de asesinatos

<sup>11</sup> Guillermina González es hermana de Sagrario González, quien fue asesinada en 1998.

<sup>12</sup> Esther Chávez Cano, es vocera de la Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer de 1994 a 1999, año en que se convierte en directora del Centro de Crisis Casa Amiga, participa también en el grupo feminista 8 de Marzo y es reconocida en la comunidad como una de las líderes del movimiento de mujeres en Ciudad Juárez.

no es significativamente distinto del de otras ciudades del país.

#### EL RESURGIMIENTO

Con la entrada del nuevo gobernador priísta Patricio Martínez García (1988-2004) la política hacia las ONG cambia y la relación con las autoridades se resquebraja, aún así, las organizaciones siguen con sus actividades, pero se hace evidente que pierden fuerza.

Las mujeres de los organismos resaltan que aunque buscan tener una cita con el nuevo Jefe del Ejecutivo Estatal, no son recibidas para hablar del tema, de inmediato el gobierno marca su distancia. Perciben a Martínez como un hombre autoritario, lo critican porque no tiene un acercamiento con ellas y por su actitud de constante desafío, además dicen que no cumple con las promesas que hace a las madres de las víctimas durante su campaña, cuando declara que no descansará, incluso que no dormirá mientras haya una mujer muerta. Además del hecho de quitarse la responsabilidad diciendo que no ocurrieron las muertes durante su mandato, sino en el de Barrio, así como la culpabilidad que adjudica al gobierno federal, al contrabando

de drogas y a la falta de recursos económicos respecto de este problema. En no pocas ocasiones se le escucha a Martínez hacer estas declaraciones

...en estos homicidios los autores tienen un común denominador, drogadictos, drogadictos, drogadictos, siempre en 95% de los casos las adicciones están en estos asuntos pero se elude este tema porque es una materia federal... (*Norte de Ciudad Juárez*, 5A, 4 de agosto de 2003).

La política del gobierno respecto de este asunto está claramente definida, el entonces Procurador de Justicia en el Estado, Arturo González Rascón declaró en una ocasión

...las mujeres que tienen vida nocturna y en altas horas de la noche entran en contacto con bebedores, están en riesgo... (*El Diario*, 23 de febrero de 1999).

Marisela Ortiz (2003)<sup>13</sup>

...la verdad es obvia, solamente fueron palabras de campaña...se lava las manos cuando ellas le dicen, señor gobernador ayúdenos... lo primero que hace es preguntarle en qué fecha desapareció su hija y si fue antes de que él asumiera el gobierno, entonces dice: no señora cobren esas víctimas a Francisco Barrio.

<sup>13</sup> Marisela Ortiz es una de las líderes más reconocidas del grupo NHRC, ella decide integrarse a la lucha a raíz del asesinato de una de sus alumnas, Lilia García Andrade. Su aportación a la lucha de las mujeres juarenses es haber ayudado a las madres a incorporarse como actoras públicas y haber logrado el resurgimiento de la causa a pesar de la política negativa de Patricio Martínez hacia las ONG.



Norma Andrade<sup>14</sup>

...al mandatario no le importa el problema y así lo ha demostrado a lo largo de su administración, pese a que durante su campaña dijo estar comprometido con los casos.

Ramona Morales<sup>15</sup>

...a mí en lo personal, ese señor...me gritó en mi cara que le exigiera a Francisco Barrio resultados, que él no resolvería nada... (Norte de Ciudad Juárez. 30 de noviembre de 2002).

A finales de 2001 con la aparición de ocho cadáveres en *el campo algodonero*, localizado en la avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria frente al edificio de la Asociación de Maquiladoras (AMAC) la situación se complica para Martínez; las protestas de las ONG se multiplican y retoman fuerza. La primera reacción es de parte de las integrantes de la CPDM, quienes realizan un plantón en las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte el 8 de noviembre de 2001



para pedir justicia a nombre de las víctimas y sus familias. El entonces Procurador Arturo González Rascón las atiende, no sin antes haberles negado la entrada a las oficinas. Ante este suceso empiezan a aparecer en el escenario político otros grupos que se suman a la lucha.

En 2001 surge otro organismo formado por las familiares de mujeres asesinadas y desaparecidas: Nuestras Hijas de Regreso a Casa (NHRC).<sup>16</sup> Se fijan como propósito principal la lucha por los derechos de las mujeres y erradicar la violencia hacia las mujeres en la comunidad juarense. “Dejar las lágrimas

<sup>14</sup> Madre de Lilia García Andrade asesinada en 2001 a los 17 años.

<sup>15</sup> Madre de Silvia Elena Rivera Morales quien desaparece el 7 de julio de 1995 y es encontrada muerta el primero de septiembre del mismo año en el Lote Bravo.

<sup>16</sup> El número de integrantes varía porque las familias van y vienen a la organización, al momento de la entrevista en marzo de 2003 tienen alrededor de 30. El gobierno de Francia entrega al grupo Nuestras Hijas de Regreso a Casa el premio internacional: “Libertad-Igualdad-Fraternidad 2003”, por su destacada lucha en defensa de los derechos humanos de las víctimas de desapariciones y homicidios contra mujeres y sus familias.

e ir hacia las acciones...y dar la voz a las personas directamente afectadas...” (Marisela Ortiz, 2003).<sup>17</sup>

NHRC surge en un encuentro que tienen las madres de víctimas de esta frontera con Norma Ledesma (2002), quien viene de la capital del estado junto con Lucha Castro y Alma Gómez para hablar sobre las irregularidades que tienen las autoridades en las investigaciones que se realizan sobre el asesinato de su hija.<sup>18</sup> En una junta que se organiza entre las familiares de víctimas, deciden que van a trabajar en conjunto, por un lado

las familias de Juárez serán auxiliadas por Marisela Ortiz y Rosario Acosta y en Chihuahua serán ayudadas por Lucha Castro y Alma Gómez.

En la capital la situación también estaba empezando a complicarse, tan sólo en el año 2001 desaparecen en 20 días cuatro mujeres: Minerva Teresa Torres (18 años) el 13 de marzo; Rosalba Pizarro Ortega (17 años), el 22 de febrero; Julieta Marlene González Valenzuela (17 años) el 7 de marzo y; Yesenia Concepción Vega Márquez (16 años) el 26 de febrero. El 16 de marzo de 2003 desaparece

<sup>17</sup> Objetivos de la organización NHRC: 1) Lograr la justicia jurídica y social para las familias afectadas, a través de diferentes acciones. 2) Promover programas de rehabilitación ocupacional para atender la salud física y afectiva de las y los integrantes de las familias que lo soliciten. 3) Impulsar la modificación, elaboración y revisión de los artículos de la ley contenidos en el Código Penal del Estado de Chihuahua que así lo requieran, por ser inoperantes y que permiten hechos violentos como éstos y muchos más. 4) Informar oportunamente a la comunidad nacional e internacional, acerca de los asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos de mujeres en el estado de Chihuahua. 5) Promover que las ciudadanas y ciudadanos de cualquier país, gobiernos, organismos internacionales y ONG, se pronuncien en contra de los asesinatos y desapariciones de mujeres y a favor de un alto a la impunidad de que gozan actualmente estos crímenes. 6) Buscar que la comunidad internacional presione a las autoridades locales, estatales y federales en México, para que destinen a las personas y los recursos materiales necesarios, para la búsqueda de la solución a esta problemática. Difundir todos aquellos pronunciamientos que la comunidad internacional haga en relación con la situación que viven las mujeres en el estado de Chihuahua.

<sup>18</sup> Norma Ledesma habla del trato que le dan cuando acude a la Procuraduría a denunciar la desaparición de su hija, lo describe como despótico e inhumano y asegura que nunca se hace nada por encontrarla. Expresa la dificultad que tiene para reunirse con el gobernador Patricio Martínez, quien se compromete a encontrarla. Los encargados del caso, le dicen que Paloma huye por propia voluntad. Habla también del ex novio de su hija Vicente Cárdenas Anchondo, quien es detenido como presunto responsable del homicidio, al que creen inocente, ya que para acusarlo se considera como evidencia importante el hecho de que se encuentra una fotografía de él cerca del cuerpo de su hija, sin embargo después una ex novia de Cárdenas, dice que una comandante llamada Gloria Cobos va a su casa a pedirle esta fotografía. Por lo tanto, los padres de la víctima consideran que hay siembra de evidencias para proteger a los culpables.

la joven Viviana Rayas (16 años) y se localiza su cuerpo el 28 de mayo, casi dos meses después se localiza el cuerpo de Neyra Azucena Cervantes (19 años) quien desaparece el 13 de mayo de 2003 (*Norte de Ciudad Juárez*, 3A, 23 de marzo de 2002).

Sin embargo, explica Rosario Acosta (2003)<sup>19</sup> que con el tiempo les es muy difícil reunirse para realizar acciones conjuntas debido a la economía familiar, la distancia, las responsabilidades de la casa y el trabajo. Las dificultades llegan cuando buscan la constitución legal de la asociación. Como en el organigrama no se incluye a ninguna de las mujeres de la ciudad de Chihuahua, de alguna forma eso es uno de los motivos que ocasiona la escisión, agrega la dirigente. Otro acontecimiento que marca aún más las divergencias es el viaje de NHRC de Juárez a Chihuahua el 19 de

junio de 2002, para entregar una carta al gobernador Patricio Martínez García con algunas peticiones.

En el momento de la llegada de las madres a la Plaza de Armas de Chihuahua, el gobernador inaugura a dos cuadras el inicio de la construcción de la Macroplaza. NHRC, con el grito de *Ni una más*, llaman la atención de los asistentes y piden ser recibidas por Martínez García, no lo consiguen y se da la confrontación con el Gobernador, algunas de las madres son agredidas por miembros de su seguridad privada.

Las madres de Ciudad Juárez rechazan la postura de enfrentamiento con las autoridades, lo que provoca el rompimiento de las relaciones con el grupo de Chihuahua. En una carta que manda NHRC a los medios deslinda a las madres de intereses políticos como han sido acusadas.<sup>20</sup> En la capital el

<sup>19</sup> Rosario Acosta es una de las líderes del grupo NHRC, lleva la Agenda Internacional hasta el 2003 cuando decide renunciar por desacuerdos con sus compañeras. Se une a la lucha a raíz del asesinato de su sobrina Cinthia Rocío Acosta (10 años) desaparecida el 9 de febrero de 1997 y encontrada muerta el 27 de febrero del mismo año.

<sup>20</sup> En dos cartas que aparecen en el periódico *Norte de Ciudad Juárez*, el 20 y 23 de junio de 2002, se acusa en una primera publicación a las ONG de utilizar a las madres con fines políticos y de utilizar símbolos religiosos como la cruz para identificar la movilización, en esta firman sólo mujeres, pero no se relaciona a ningún partido político. En la segunda carta se acusa al ex gobernador Barrio Terrazas, al PAN y a las organizaciones de manipular las acciones de las familias, de haber guardado silencio durante la administración panista respecto de los crímenes y de nunca haber hecho propuestas serias para la solución de los mismos y protección de las familias, uno de los párrafos dice "...su función para nosotras, ya es muy clara: Lucrar políticamente con el dolor de las madres y hermanas de las jóvenes desaparecidas y buscar el desprestigio de un gobierno que sí ha logrado frenar los crímenes y dar respuesta a sus gobernados, aplicando la justicia y el derecho en contra de quienes se han visto involucrados en estos homicidios...", firman como responsables de la publicación, las entonces diputadas locales priístas Alma Delia Urrutia Canizales y Martha Laguerre Lardizábal.

grupo cambia su nombre por Justicia Para Nuestras Hijas (JPNH) y acuerdan que en adelante sólo se sumarían a las acciones si lo consideraban pertinente, a partir de este encuentro se pierde el contacto entre ambas ONG.

En 2002 surge Integración de Madres por Juárez (IMPJ), organismo integrado por familiares de víctimas. Entre sus principales propósitos está ayudar psicológica y económicamente a familias de víctimas. Buscan alejarse de los grupos ya existentes para evitar el supuesto lucro que éstos hacen con el dolor de las familias. Benita Monárrez<sup>21</sup> declara en una ocasión que en este grupo estaban *las verdaderas madres de las mujeres victimadas*. El trabajo de IMPJ se vincula estrechamente al Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHIMU).

El ICHIMU se crea en 2003 como respuesta de las autoridades para dar cabida a la problemática de las mujeres de esta entidad. Como una de sus primeras acciones y bajo el argumento de la reparación del daño a las madres

y/o familiares se les ofrece de parte del Gobierno del Estado una mensualidad económica, terapia psicológica y donativos en especie.<sup>22</sup>

Sin duda, la unión de algunas madres con el gobierno estatal constituye una estrategia para bajar la presión que se está ejerciendo en su contra y también constituye un intento de entorpecer la coalición que las madres siempre han tenido con las mujeres de las ONG, dividir la movilización y quitarles fuerza.

Victoria Caraveo<sup>23</sup> es nombrada directora del ICHIMU, ella inicia su vida pública trabajando para la comunidad en 1990 como dirigente de su propia organización: Mujeres por Juárez; después se integra junto con su organismo a la Coordinadora en 1994; llega a ser su vocera en 1999 hasta que ingresa a su nuevo puesto en el gobierno estatal, donde lejos de generar una armonía entre gobierno y ONG, crea un escenario de acusaciones y hace aún más profundas las divergencias.

Como miembro de la Coordinadora

<sup>21</sup> Benita Monárrez es madre de Laura Berenice Ramos Monárrez, una de las ocho víctimas halladas en el campo algodonero.

<sup>22</sup> Algunas madres de víctimas reciben también pies de casa otorgados por el Instituto de la Vivienda (IVI) del estado de Chihuahua en 2004.

<sup>23</sup> Esta funcionaria es una mujer cuya familia pertenece a las élites de poder del estado de Chihuahua. Sin embargo para las miembros de ONG entrevistadas es su liga con el poder y su condición de clase social lo que la lleva finalmente a ser elegida por el gobernador para un puesto que puede ser ocupado por otras mujeres con mayor trayectoria. Caraveo mantiene su cargo en el ICHIMU hasta que Patricio Martínez deja de ser el gobernador en 2004.

en 1999 sus declaraciones pugnan por una unión entre organismos y desestima el discurso gubernamental

...dicen [las autoridades]...nosotros estamos concientes del dolor de las madres, no es cierto ni están concientes, ni han hecho nada, siguen las investigaciones iguales y es una porquería... (Victoria Caraveo, 1999).

En cambio, como funcionaria trans-forma su discurso respecto a su percepción sobre los asesinatos. Pone en duda el trabajo de las ONG y al estar en desacuerdo con éstas en un asunto sumamente delicado, las cifras de muertes, acentúan el distanciamiento. Durante una entrevista declara:

...no caigamos en el juego de las cifras...una vez que tengamos claras estas listas podemos sentarnos y crear políticas (...) después de haber estado trabajando con las organizaciones...estoy haciendo otro tipo de trabajo, con otra perspectiva... de propuesta y de seriedad...

Se defiende de las críticas

...fue una pantomima de que estábamos unidas (...) que me digan que la molestia es que no nos gusta porque te sigue la prensa (...) es que tenemos mucha rabia con el Instituto porque llega y trabaja...porque tengo recursos... (Victoria Caraveo, 2003).

Caraveo descalifica desde el ICHIMU, a través de los medios, el trabajo de las ONG, habla de que ahora ella sí trabaja con seriedad y con propuestas, pero ¿qué significan entonces todos los años compartidos con sus compañeras?, ¿hasta que fue parte del gobierno descubre que la causa de las ONG no es propositiva y es una farsa?

En un contexto hostil, explica Tarrés (1999), las autoridades definen a las ONG como enemigos y utilizan estrategias que van desde la eliminación física, el retiro de apoyos económicos, rompimiento de redes, desprestigio, ridiculización y aislamiento público, cooptación gubernamental, apropiación del discurso y de sus demandas. En este tenor, la cooptación se vuelve también otra estrategia común,

consiste en la apropiación del discurso y las demandas de las ONG, lo que lleva a enfrentarlas entre ellas mismas y a fragilizarlas como sujetos políticos. En este caso, para el gobierno Caraveo es una pieza clave dentro de este contexto, saben los funcionarios que ella les ayudará a enfrentar a sus adversarias, ya que está al tanto de las fortalezas y las debilidades de los grupos y de la misma forma conoce si no a todas, sí a la mayor parte de las



actoras que participan en éstos.

El primer debate público con el Instituto gira en torno a un asunto muy discutido: el número de mujeres muertas, cifras en las que ni siquiera las ONG han llegado a un acuerdo en más de una década. Los números que se obtienen mediante una auditoria que manda realizar el ICHIMU, indica que un porcentaje mínimo de mujeres está dentro del tipo de asesinato sexual por los cuales se protesta, es decir, los crímenes sexuales. Los resultados: del 1ro. de enero de 1993 al 23 de julio de 2003, se registra que un total de 321 mujeres son víctimas de homicidio. Sin embargo, en esta investigación se advierte que sólo 90 mujeres son víctimas de homicidio sexual, lo que constituye el 28% de los crímenes registrados, el 72% de los casos corresponde a móviles no sexuales (*Auditoría Periodística*, 2003).

Se puede observar que de los estudios que han hecho distintas instituciones, se obtienen cifras si no idénticas, sí muy similares en el número de asesinatos. La PGJE de 1993 a 2004 reporta un total de 333 asesinatos; el ICHIMU de 1993 a 2003, habla de 321; Amnistía Internacional (AI) de 1993 a 2003, contabiliza 360; la ONU reporta 328 entre 1993 y 2003. Mientras que para la ONU, PGJE y el ICHIMU sólo 26%, el 27% y el 28% de las muertes, respectivamente, presentan

un móvil sexual, para AI la cifra es más alta y está en un 35%. Por su parte, el informe de la PGJE dice que mientras que en 1995 y 1998 se registran 54 homicidios de tipo sexual, entre 1999 a 2003 la incidencia se reduce a 29 casos, en promedio, los homicidios sexuales contra mujeres documentados en los últimos diez años por la Procuraduría Estatal han sido 8.5% anuales, esta dependencia remarca cómo durante el gobierno de Patricio Martínez se reducen los crímenes a un 8.5 % anual del 13.5 % en promedio anual que tiene el gobierno de Francisco Barrio (Amnistía Internacional, 2003; ONU, 2003).

Caraveo hace un llamado a todas las ONG, les pide dejar las discusiones sobre los números y empezar a discutir y analizar la magnitud del problema, insiste en señalar que las inconformidades se deben a que la atención ahora es para ella, así como por los recursos que tiene para trabajar, hace referencia a los problemas internos de los grupos, evidencia sus debilidades; parece no comprender que con estas acciones hace más profunda la brecha con las autoridades. Por su parte, para las mujeres de las ONG, la investigación no hace más que distorsionar las cifras y como forma de protesta rompen relaciones con la funcionaria, para ellas, se ha convertido en aliada del gobierno (*Norte de Ciudad Juárez*, 21 de noviembre de 2003).

Otra de las estrategias de Caraveo es acusar de lucro económico y político a los distintos grupos, los culpa de utilizar a las madres para recabar fondos. Marisela Ortiz (2003) de NHRC la inculpa, a su vez, de dividir a este grupo, al convencer a algunas madres de víctimas de que abandonen la organización<sup>24</sup> al ofrecerles apoyos económicos.<sup>25</sup>

Esta campaña permanente en contra de las integrantes de las ONG tiene efecto en las madres, sobre todo en los años subsecuentes al 2003. Algunas familias incriminan a las mujeres de las organizaciones de actuar con fines de lucro, de tener actitudes protagonistas y de utilizar la causa para buscar puestos políticos, hacen declaraciones muy desafortunadas a través de los medios de comunicación que hacen públicos los debates hasta entonces privados.

Irma Pérez (2002) "...nada más andan pidiendo a nombre de nosotras...hay mucho dinero que han trabajado con

nuestro dolor...".<sup>26</sup> Indica que en más de diez años del fenómeno de violencia lo único que el gobierno estatal ha creado es una cortina de humo y divisionismos, que mantienen desarticuladas a las madres y familiares de víctimas. Señala entre los/las actores(as) que se han involucrado para evitar a toda costa la justicia, a la directora del ICHIMU, Victoria Caraveo, quien se ha encargado a su parecer, de envolver a las madres con argumentos y dádivas. Igualmente Paula Flores<sup>27</sup> dice haberse retirado de la lucha pública debido a que organismos gubernamentales intentaron agarrarse de su lucha para lucrar con las familias de las víctimas (*Norte de Ciudad Juárez*. 1A, 16 de abril de 2004).

Benita Monárrez acusa también a las organizaciones de lucrar con el dolor, a nombre del IMPJ decide presentar una denuncia ante el Ministerio Público en contra de la organización NHRC por los donativos que supuestamente ha solicitado este grupo en Estados Unidos a nombre

<sup>24</sup> Se refiere al grupo Integración de Madres por Juárez "...nosotros lamentamos mucho las condiciones en que esta organización...surge dentro de la Procuraduría y que de alguna manera no se les permite hacer plena conciencia de lo que ellas pueden hacer, de que se les ha cooptado con beneficios económicos...ellas pertenecían a nuestra organización...".

<sup>25</sup> Respecto de las acusaciones que se les han hecho por lucrar con las madres dice Marisela Ortiz (2003) "...nosotras hemos abierto dos cuentas bancarias, una en Estados Unidos y otra en México, y tuvimos que abandonarlas porque nunca nos dieron un centavo, absolutamente nadie depositó nada, de modo que esas cuentas se cerraron...ella insistía mucho en ello y que nosotros estábamos pidiendo una camioneta y una oficina, la oficina la tenemos, la camioneta también la tenemos, entonces no tenemos por qué estar pidiendo y menos al Instituto de la Mujer que nos ha atacado tanto...".

<sup>26</sup> Irma Pérez es madre de Olga Alicia Carrillo asesinada en 1995.

<sup>27</sup> Madre de María Inés Sagrario González encontrada asesinada en 1998.

de la organización que Monárrez preside, pide se abra una investigación y se proceda legalmente<sup>28</sup> (*Norte de Ciudad Juárez*, 4 de abril de 2003).

Igualmente otras madres de víctimas miembros de NHRC refieren su molestia porque algunas asociaciones pidan dinero en nombre de las mujeres asesinadas, específicamente hablan de Esther Chávez, Soledad Aguilar (2002)<sup>29</sup> dice al respecto "...ella siempre ha utilizado pedir ayuda económica para las víctimas de las muertas de Juárez...".

Sobre estos cuestionamientos, las activistas expresan que el gobierno busca magnificar sus fallas con campañas de difamación y que esto no es más que una estrategia para justificar su ineficiencia, busca el enfrentamiento entre ellas, las acusa de que pertenecen a partidos políticos, de lucrar con el dinero y con las madres de las víctimas, Rosario Acosta (2003) "... las organizaciones no hemos sido... cautas para entender que ésta ha sido una estrategia del gobierno para

causar división...".

Respecto de sus diferencias, las mujeres opinan, que si bien las hay, no son irreconciliables como se vislumbra, aunque también observan oportunismos de algunas y de otras que sólo se dedican a la crítica, y las que sólo buscan proyectar una carrera personal en la política. Coinciden en señalar que todas hacen un gran esfuerzo, pero que hace falta trabajar aún más para acortar las divergencias y resaltar las convergencias, propiciar el diálogo, ya que mientras este esfuerzo de coordinación no siga, la lucha no podrá avanzar con solidez y coherencia. Consideran que sí es posible subsanar las diferencias, aún y con sus diferencias ideológicas, que aunque se pudieran pensar como un factor que propiciara su separación, no creen que esto tenga un papel predominante en su adherencia como grupo, ya que el objetivo de su lucha les da más similitudes que diferencias.

Las integrantes de las ONG justifican

<sup>28</sup> Marisela Ortiz (2003) de NHRC niega tajantemente que su grupo hubiera recabado esos fondos, esta demanda no ha procedido hasta la fecha. Tiempo después la misma Benita Monárrez es acusada por otro grupo de madres de haber obtenido dinero de la oficina de Desarrollo Social para instalar una tortillería en su beneficio. Le dan los fondos según dicen, bajo el argumento de que se utilizarían las ganancias para ayuda de las integrantes del organismo IMPJ. Las denunciantes son: Celia de la Rosa, María Consuelo Pando, Juana Villalobos, María Rosario Hernández, María de Jesús Ramos Villanueva, Marta Ledesma, María de Jesús Díaz, Rosa Montañés y Gloria Solís.

<sup>29</sup> Esther Chávez Cano niega estas acusaciones, explica que los donativos que se reciben son pedidos a nombre de Casa Amiga. Soledad Aguilar es madre de Cecilia Covarrubias asesinada en 1995. La joven desaparece junto con su bebé y sólo se encuentra el cuerpo de Cecilia, hasta ahora el paradero de la menor no está claro.



el enojo de las madres por el fuerte problema que atraviesan, se defienden diciendo que sólo han tratado de auxiliar para hacer más fácil el proceso al que las familias se tienen que enfrentar, que si se perciben como protagonistas, es porque ellas coordinan las acciones, pero lo hacen porque a las madres les es difícil enfrentar a los funcionarios, ya que tienen generalmente una actitud pasiva cuando están con ellos. Rosario Acosta (2003)

...tienen mucho coraje encima, el problema es que no lo dirigen a la persona que lo tienen que dirigir, cuando vamos a las instancias ellas callan, callan y callan, o prefieren delegar la palabra a alguien....

Otro motivo de divisionismos entre ellas, ha sido la forma de llevar sus acciones, las cuales han sido desde actividades en las calles, mítines, marchas, hasta llegar a realizar negociaciones directas con los funcionarios de los tres niveles de gobierno. Sin embargo al paso de los años se observa cómo ha habido un desplazamiento de las primeras acciones, las concentraciones masivas disminuyen; en cambio, las reuniones para pactar con

autoridades se dan con mayor frecuencia, esto ha provocado fisuras entre ellas.

También los conflictos entre las mujeres de los grupos se derivan por quién representa a las madres y a las víctimas, así como la posición que ellas deben tener en este juego político. Hay quienes opinan que su trabajo como activistas debe ser sólo como apoyo para las madres, que sea su voz la que predomine; sin embargo para otras, ellas no son la parte trascendental de esta problemática, sino que son sólo un elemento de este engranaje de la violencia y la lucha en contra de los feminicidios.

Respecto de la multiplicidad de conflictos de lo que se ha hablado en este apartado, entre las mujeres de los organismos hay varios puntos por aclarar. Por un lado se sabe que el dinero no se manipula con facilidad, los fondos que entregan las diversas asociaciones están controlados y hay que demostrar para qué son utilizados y cómo,<sup>30</sup> además la mayoría de las ONG que confluyen en la movilización, tienen tiempo trabajando como para atreverse a ser afectadas en su historial por un mal manejo de dinero y muchas de éstas, no

<sup>30</sup> María Elena Ramos (2003) dice al respecto "...hay una supervisión directa de los recursos, si hay quien dona... para hacer un trabajo de mujeres, yo tengo que hacer un trabajo de mujeres...las fundaciones son las encargadas de ver nuestra transparencia, tenemos nosotros que entregar resultados, no nada más el papel con los datos, sino evidencia del trabajo que hacemos, cuando se habla del lucro siempre están equivocados...". Ramos es directora del Grupo Compañeros, que atiende a enfermos de VIH y a adictos a las drogas. Ha sido integrante de la CPDM desde su creación y actualmente es su vocera, es una mujer que ha hecho un gran trabajo en la comunidad juarense en el ámbito de la salud y en la defensa de los derechos femeninos.

sólo se dedican a trabajar en contra de la violencia, tienen agendas diversas de trabajo y difícilmente van a arriesgar su prestigio y afectar su actividad principal.

En relación al lucro político, si bien el asunto se debate en un espacio público-político y puede prestarse a suspicacias y confusiones, no necesariamente se debe hablar de utilizar la participación como estrategia para obtener puestos de poder. Es importante señalar que de la gran cantidad de mujeres que participan en las ONG, sólo unas cuantas se han dedicado a la política formal; han intentado obtener puestos de representación popular o han obtenido algún cargo como funcionaria o directora de alguna institución estando involucradas en esta lucha, por lo que resulta ser un porcentaje muy bajo si se hace un recuento de todas las mujeres que participan. Se podrían mencionar casos aislados: Lucha Castro y Alma Gómez contendieron en la ciudad de Chihuahua en las pasadas elecciones de 2004, la primera como diputada y la segunda como síndico; pero hay que señalar que ellas tienen ya con anterioridad un historial de lucha en la política formal e informal, participando en Mujeres de Negro, Justicia Para Nuestras Hijas y El Barzón. En Ciudad Juárez la señora Norma Andrade, quien surge al espacio público a través de la muerte de su hija, también fue candidata a diputada en las pasadas



elecciones. Victoria Caraveo, directora del ICHIMU, emerge como luchadora social en 1990 a través de que organiza el grupo Mujeres por Juárez. Esther Chávez quien es directora de Casa Amiga, participa en alguna ocasión como candidata suplente a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, no obstante ella tiene un largo historial en su lucha por la defensa de mujeres, aun antes de involucrarse en este asunto de los asesinatos.

En los organismos, explica Tarrés (1999), los conflictos internos son normales, se dan debates por la democracia, el poder y el dinero, pero explica que éstos no son conflictos exclusivos de las movilizaciones de mujeres. En el caso de las organizaciones juarenses, los problemas que han experimentado se ha querido que se vean como asuntos irreconciliables y se ha tratado como si estos organismos fuesen las únicas instituciones con problemas internos, el que haya temas en que no se esté

de acuerdo se ve más como signos de debilidad y no de esfuerzos por corregir las divergencias y enriquecer la causa. Por esta razón, explica Alicia Martínez (1992) los cuestionamientos y críticas entre las mujeres tratan de evitarse por temor a que se confunda con imposiciones, conflictos, peleas o rupturas.

#### REFLEXIONES FINALES

La modalidad organizativa más reciente que representa una forma de acción colectiva muy efectiva para las mujeres, ha sido amparada bajo Organizaciones No Gubernamentales. La integración de ONG representa una plataforma de participación política para que las actoras logren insertar sus temas en el debate público y se instituyan como negociadoras que demandan, crean proyectos y hacen propuestas.

En Ciudad Juárez las ONG tienen más de diez años pidiendo que se hagan acciones concretas para detener los crímenes y esperando justicia para las mujeres asesinadas. Cuando aparecen por primera vez, perciben la nula importancia que se le da a este grave problema y observan cómo las víctimas son exhibidas por las autoridades como mujeres con doble vida. Su movilización resulta un ejercicio que redimensiona la esencia del fenómeno de los asesinatos y lo transfiere de lo privado a lo público, lo traspasa de un contexto

local hasta el plano internacional para obligar a las autoridades a enfrentarse cara a cara con el conflicto.

La creación de la CPDM en 1994 tiene un valor importante, por primera vez en la localidad se organizan mujeres en una lucha por las mujeres con el propósito de hallar justicia y alzar la voz para detener los asesinatos, se conjugan actoras con distintas ideologías e intereses que encuentran una forma de acción colectiva a través de una gran inversión de trabajo y compromiso hacia la causa.

Su lucha mantiene un protagonismo en el espacio público aun con sus enfrentamientos con el gobierno de Francisco Barrio, quien nunca entiende la seriedad de la situación y su falta de visión ante el problema ocasiona que no se le vea como un asunto prioritario. Cuando Patricio Martínez (1998-2004) llega a la gubernatura olvida sus promesas de campaña de terminar con los asesinatos y encontrar a los culpables, adopta una actitud retadora y crea una lucha de poder, se aleja de las ONG, lo cual empieza a desordenar el movimiento, su línea hacia los grupos genera un ambiente de tensión que crea problemas internos, lo que termina por exhibir ante la comunidad sus principales vulnerabilidades.

El año 2001 significa un reavivamiento de la causa, con la aparición de ocho cuerpos resurge la CPDM y otros

organismos cuya característica principal es la de aglutinar a familiares de víctimas. Los nuevos frentes tienen la particularidad de que ya están integrados por las madres, quienes vienen reclamando sus espacios y se introducen como sujetos activos en el ámbito público, lo que significa para la CPDM un desdibujamiento del escenario. Grupos como NHRC en Juárez y JPNH en Chihuahua toman el protagonismo en esta historia.

Ante los conflictos internos de los organismos, las madres empiezan a cuestionarse cómo ubicarse, hacerlo sin intermediarias, del lado oficial o construyendo alianzas con las mujeres de las ONG. Ellas consideran que la lucha de las mujeres de los grupos no ha servido para resolver los crímenes, pero sí ha sido beneficiosa para que pudieran obtener fondos, capital político o puestos como funcionarias; el malestar es alimentado por las estrategias del gobierno en contra de los organismos, la

cooptación y la creación de una campaña de desprestigio.

Ahora bien ¿qué pasa con la movilización? Existe sin duda un número importante de ciudadanos(as) que participan, pero son muy pocos comparado con la seriedad del problema. Como sabemos, la comunidad sólo responde en coyunturas específicas y es difícil mantenerla en una participación constante, particularmente en situaciones como ésta en que el imaginario social interviene en demérito de la causa, porque interioriza en los sujetos ideas sobre la culpabilidad de las víctimas, aunado a la dimensión que se ha dado a los conflictos entre las mujeres de los organismos y el supuesto lucro que hacen de la causa.

No obstante, es importante decir que aunque no en multitudes, las juarenses están presentes y sin duda puede hablarse de un empoderamiento femenino que ha generado espacios de poder del que no hay vuelta atrás.

**Cuadro de siglas de ONG**

<b>Organizaciones</b>	<b>Siglas</b>
Coordinadora en Pro de los Derechos de la Mujer	CPDM
Comité Independiente de los Derechos Humanos de Chihuahua	CICH
Centro de Orientación de la Mujer Obrera	COMO
Salud y Desarrollo Comunitario	SADEC
Organización Popular Independiente	OPI
Centro de Investigación y Solidaridad Obrera	CISO
Mujeres por Juárez	MPJ
Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C.	CEDIMAC
Centro de Estudios y Taller Laboral A.C.	CETLAC
Voces sin Eco	VSE
Red de Mujeres	RDM
Justicia Para Nuestras Hijas	JPNH
Nuestras Hijas de Regreso a Casa	NHRC
Integración de Madres Por Juárez	IMPJ

## Bibliografía

Aziz, Alberto. *Los ciclos de la democracia. Gobierno y elecciones en Chihuahua*. México: Porrúa-UACJ-CIESAS, 2000, pp. 125.

Martínez, Alicia Inés. "La identidad femenina: crisis y construcción" en María Luisa, Tarrés. *La voluntad del ser. Mujeres en los noventa*. México: El Colegio de México, 1992, pp. 65-84.

Tarrés Barraza, María Luisa. "Las organizaciones del movimiento de mujeres en la reforma política" en Alberto J. Olvera (coord.). *La sociedad civil. De la teoría a la realidad*. México, El Colegio de México, 1999, pp. 217-257.

## Otras fuentes

*Homicidios de Mujeres: Auditoría Periódica* (enero 1993–Julio 2003). Ciudad Juárez, Chihuahua. (2003).

Informe de Amnistía Internacional. AMR 41/026/2003/s. "Muertes intolerables. México: 10 años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua" (2003).

Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua, México (2003).

*Norte de Ciudad Juárez*. Ciudad Juárez, Chihuahua.

*El Diario*. Ciudad Juárez, Chihuahua.

## Entrevistas

Elsa Almeida. 21 de febrero de 2003.

Esther Chávez Cano. 29 de enero de 2003. 20 de febrero de 1999.

Guillermina González. 21 de febrero de 1999.

Irma Pérez. 23 de marzo de 2002.

Josefina González. 23 de marzo de 2002.

Lucha Castro. 5 de abril de 2002

María Elena Ramos. 1 de julio de 2003.

Marisela Ortiz. 29 de enero de 2003

Norma Ledesma. 5 de abril de 2002.

Rosario Acosta. 6 de julio de 2003.

Soledad Aguilar. 23 de marzo de 2002.

Victoria Caraveo. 24 de julio de 2003. 23 de febrero de 1999.